

explorando la ciudad

Movimientos Sociales y Crecimiento Urbano, en la segunda mitad del S. XX, en la Ciudad de Mérida, Venezuela

El caso de los Comités Pro-viviendas

(1985-1995)

*Oscar Aguilera **

Resumen

El presente caso constituye parte de una investigación realizada durante la primera mitad de la década de los noventa (financiada por el CDCHT de la ULA) donde se pretende analizar la experiencia concreta, entre otras, de los llamados Comités Pro-vivienda que funcionaron entre 1985 y 1995 en Mérida, Venezuela, desde la perspectiva de los **Movimientos Sociales Urbanos**. Se describen los antecedentes, características y logros alcanzados poniendo en evidencia las potencialidades del mismo como generadoras de un **sujeito y de una identidad ciudadana** en construcción. Del mismo modo se evidencian las limitaciones intrínsecas dada la inevitable correlación entre estos procesos y el contexto regional, nacional e incluso latinoamericano.

Términos claves: Movimientos Sociales Urbanos, Mérida, Venezuela. Identidad, sujetos sociales.

Abstract

This case is part of a research made during the first half of nineties (financed by the ULA-CDCHT), and pretends to analyze the concrete experience of the Pro-House Associations, which functioned between 1985 and 1995 in Mérida, through the Urban Social Movements perspective. The background, characteristics and achievements are described, showing the power of these movements, as generators of a subject and an increasing citizenship identity. In addition, the intrinsic

* Sociólogo, M.Sc. Grupo de Investigaciones en Socioantropología de la Ciudad (GISAC), ULA, Mérida, Venezuela. telefax 58 74 403960; e-mail odagui@ciens.ula.ve

limitations are evident, given the unvoiced correlations between these process and the regional, national and even Latinamerican context.

Key Words: Urban Social Movements, Mérida, Venezuela, Identity, Social Subjects.

Hacia finales de la década pasada, la ciudad de Mérida en Venezuela, se caracterizó por un elevado grado de conflictividad social que tuvo, incluso, la capacidad de adelantar acontecimientos emblemáticos sobre la situación de crisis que vivimos y que luego, con inusual potencia, se repetirían y proyectarían a nivel nacional¹.

Muchos de estos eventos estuvieron marcados por una elevada dosis de violencia, represión y enfrentamientos de calle, los cuales expresaron un elevado descontento general como respuesta a un conjunto de problemas de diversa índole pero atizados por el desarrollo de la crisis más severa que han vivido, la sociedad venezolana y las sociedades latinoamericanas, en toda su historia.

En efecto, junto a los problemas locales que explicarían parte de las causas de tanta violencia y de tanta conflictividad, teníamos como contexto de la misma, la crisis económica que arrastrábamos desde el denominado «viernes negro» de 1983, el agotamiento del modelo socio-político y del modelo socio-económico que habían inspirado nuestra realidad al menos en los últimos cincuenta años, lo cual se pondría en evidencia, con mayor claridad, a principios de los años noventa.

Una excelente retrospectiva de los conflictos locales de la época a la que hemos hecho referencia en Mérida, se encuentra en García C. y Jiménez O. (1991). Entre los enfrentamientos que se indican como característicos de esos años (1986-1988) se señala el que ellos denominan «conflicto que surge por la ausencia de una política de viviendas de interés social». En razón de esta causa se van a organizar en distintos puntos de la Ciudad un conjunto de Comités Pro-vivienda que tendrán como eje de sus luchas y como reivindicación fundamental precisamente, la solución de ese acuciante problema.

Por otro lado, a lo largo de los años ochenta y como parte de nuestra labor como responsable de la Cátedra de Sociología Urbana en las Escuelas de Geografía y Arquitectura de nuestra Universidad, participamos en un sostenido esfuerzo de investigación² acerca de los barrios populares de Mérida, de su génesis, de las causas que los producen y de

¹ El estallido de violencia colectiva del 13 de marzo de 1987 que tuvo lugar en la Ciudad de Mérida a propósito del asesinato de un estudiante, dado el elevado grado de participación popular, de conmoción generalizada y de paralización de la Ciudad es, sin lugar a dudas, el más inmediato antecedente de los levantamientos ocurridos el 27 y 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas (el famoso Caracazo). Eventos cuya reperiencia en América Latina (Santo Domingo, Brasil, Argentina, entre otros) en los últimos años, constituyen dramática expresión del descontento y la conflictividad imperante en el subcontinente.

² «Los Barrios de Mérida». Proyecto financiado por el CDCHT de la ULA.

los procesos dentro de los cuales aparecen, se desarrollan, mutan hasta consolidarse o eventualmente desaparecen.

De ese modo, pudimos constatar como la agudización del problema habitacional determinó no solo un incremento cuantitativo en el número de demandantes sino que «el ambiente» conflictivo hacia finales de la década generó también un grado de organicidad y de beligerancia popular sin precedentes en la historia reciente de Mérida.

Nuestra participación en al menos tres investigaciones diferentes³, nos permitió conocer de cerca la génesis, el «modus operandi», los logros y la posterior evolución de esos comités.

Se trata de considerar estas experiencias intentando vincularlas a un proceso de más largo aliento a partir del cual queremos reconocer el desarrollo de un Movimiento Social Urbano local, responsable, a nuestro modo de ver de: la auto-conformación de parte de nuestra estructura social vigente y del crecimiento y desarrollo físico de una parte significativa de nuestra Ciudad, todo ello dentro de un proceso de transformación sociocultural que apunta a la creación de identidades sociales de nuevo tipo. Un Movimiento Social caracterizado por un proceso de creación y reproducción social a partir del cual se conforman en el largo plazo: sujetos, identidades y productos; dentro de una dinámica que va, de la determinación estructural inconciente pasando por una progresiva articulación entre necesidades y experiencias, así vemos cómo se combinan situaciones locales y determinaciones contextuales. ¿Qué perspectiva avisa ese proceso? Asunto difícil de contestar en tiempos de «inflexión histórica» (Fernando Calderón, 1995: 117) o de «ondas largas» (Tomas Villasanté, 1994, p.33) pero sobre el cual regresaremos al final.

1. Mérida en la segunda mitad del Siglo XX

En una Ciudad secundaria, de tamaño intermedio, fuertemente dependiente de la inversión estatal, vía funcionamiento de una Universidad Nacional Autónoma, la Universidad de Los Andes (ULA) y de las inversiones del Gobierno nacional, regional y local; con un flujo migratorio campesino local permanente desde la tercera década de este Siglo, la historia de su crecimiento y expansión está centralmente condicionada por factores comunes al crecimiento urbano de las ciudades venezolanas. En este sentido, como marco referencial histórico espacial, nos

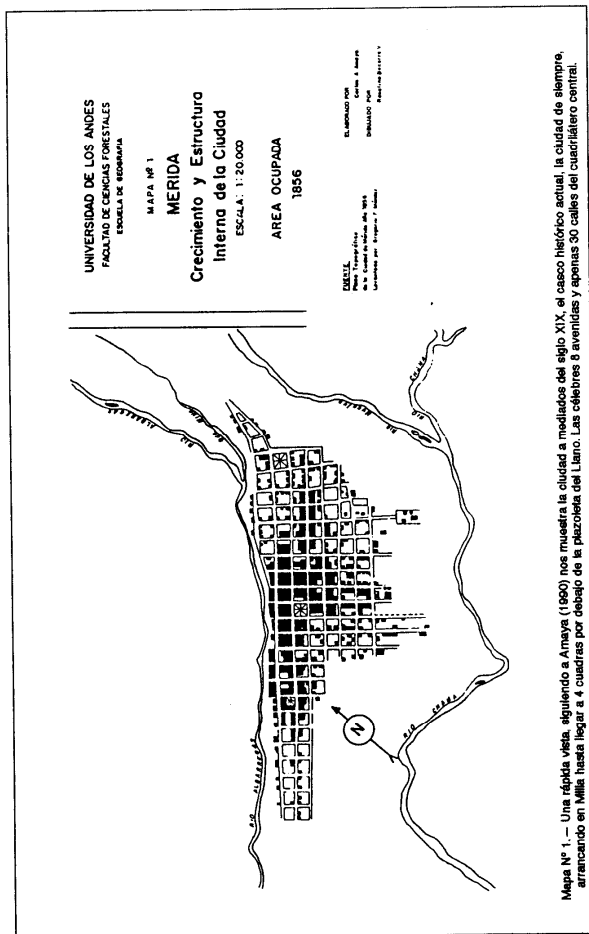
³ Se trata, en primer lugar, de la investigación mencionada en la nota anterior sobre los barrios de Mérida, durante los años ochenta; así como la que empecé personalmente, desde 1991, sobre los Movimientos Sociales de Mérida de la que se extraen los casos analizados en la presente Tesis y finalmente, la investigación de nuestro Grupo de Investigaciones en Socioantropología de la Ciudad (GISAC) referida a la Pobreza Crítica en Mérida. En todos los casos, las mismas fueron financiadas por el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes, (CDCHT-ULA).

acogeremos a los excelentes trabajos de Amaya, 1989 y 1990, en cuanto a descripción y caracterización geofísica de la Ciudad, en el sentido de considerar como válida y útil su referencia a las etapas y causas del crecimiento de Mérida.

Amaya 1989, distingue tres etapas: Colonial, siguiendo a Hardoy, 1972; la cual arranca con su fundación en el Siglo XVI y cuyo modelo se mantiene hasta la tercera década de este Siglo. Una segunda etapa, de Transición, que va desde finales de los años veinte hasta los años cincuenta, transición entre el modelo colonial de ciudad y el actual; y tercero, la etapa Actual, que va desde los años sesenta hasta nuestros días.

Los antecedentes más remotos del caso de los Comites Pro-vivienda, se vinculan a la etapa de transición, con el inicio de la migración campesina, desde las zonas rurales inmediatas, atraídas por el inicio del crecimiento moderno en los años veinte y treinta del actual siglo, ruptura del modelo colonial de ciudad y comienzo de la transición; en ese proceso ubica Amaya 1989, la aparición de lo que llama los primeros barrios marginales de la Ciudad, basadas fundamentalmente en invasión de terrenos y autoconstrucción de viviendas. El caso más notorio en esa etapa fue el de los terrenos aldeaños al recién construido Aeropuerto de la Ciudad, sector denominado para la época Llano Grande, donde, en su margen izquierda, se concentraron invasiones y migrantes rurales y en su margen derecha, urbanizaciones de clase media y sectores pudientes que habían empezado a abandonar el Centro y Norte de la Ciudad. En concreto se trata de los Barrios que se inician en esos años y que hoy se denominan Campo de Oro (nombre de la Hacienda del lugar que posteriormente será adquirida por la ULA en 1960), especialmente los de la parte Norte, área de Sta. Elena. Amaya denomina al proceso Inicio de la Segregación Residencial, la cual calificará de creciente en los años sesenta y setenta. Con la transición aludida y el período que arranca en los sesenta la dinámica descrita tiende a generalizarse; cada vez con más fuerza y cada vez en mayor cantidad llegan a la Ciudad migrantes campesinos de la región, lo cual determinará la generalización de la segregación residencial y la multiplicación de las invasiones y los enfrentamientos de estos migrantes con el Estado en su dimensión local y regional.

Abandonando ahora el modelo de Amaya o mejor, concentrándonos en la relación de estos sectores con el contexto socioeconómico y sociopolítico de la época, lo que quisiéramos destacar como antecedente que explique, es la relación entre las acciones de estos sectores en tanto que nuevos residentes que demandan, se organizan y realizan acciones y un gobierno local/regional y hasta nacional (a partir de las instituciones y organizaciones que representan localmente entes nacionales) que procesa esas demandas; bien para satisfacerlas, reprimirlas, postergarlas



y/o mediatizarlas. A cada etapa, corresponderá una forma de respuesta y ella generará, una reacción de los demandantes la cual terminará provocando cambios en la fisonomía física de la Ciudad pero, sobre todo, en la conformación (jautoconformación!) de nuevos sectores, nuevos ciudadanos y nuevas identidades; así estimamos en este caso, precisamente, el modo como se produce la sociedad a sí misma.

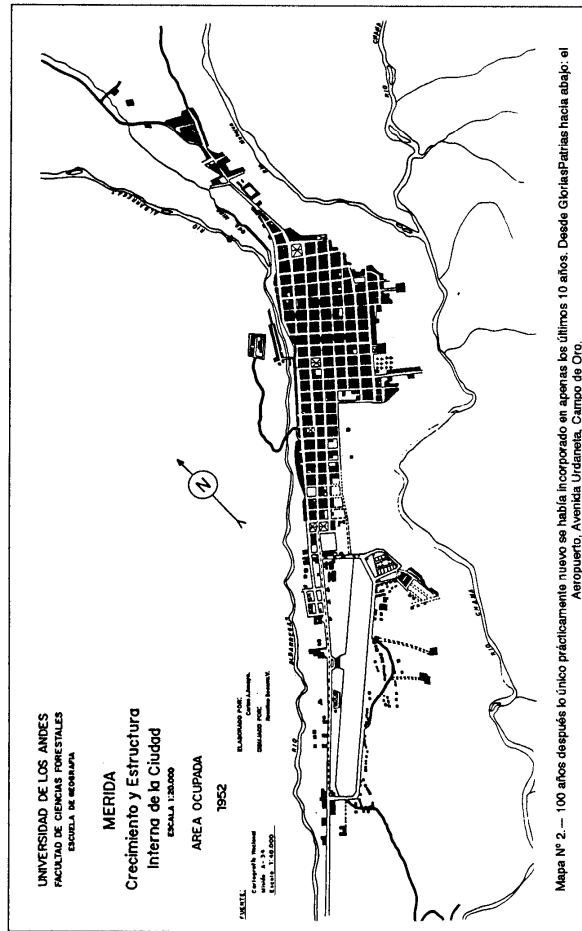
El período histórico en el cual queremos centrar el análisis que deseamos realizar se corresponde con los años de la transformación de Venezuela en el país que hoy somos. Se trata, en la práctica, de privilegiar el denominado proceso de modernización a partir del cual nuestro país pasó a ser una nación inmersa en la más profunda transformación que hallamos tenido, esa transformación puede, de manera expedita, resumirse en:

a) En lo económico, nos convertimos en una sociedad industrialista —que no industrializada— pues a pesar de la discusión actual sobre la naturaleza de nuestro modelo económico, cualquiera de las opciones, suponiendo que sean diversas, apuntan todas al modelo industrial capitalista. Asunto aparte, no por ello menos importante, resulta el carácter rentista de nuestro «desarrollo» y el ambiguo sentido capitalista de Estado que nos caracteriza.

b) En lo sociopolítico, una vez constituido el Estado Nacional Moderno y buena parte de su institucionalidad en la primera parte de esta centuria, la misma se afirma tras el proyecto de convertirnos en una «sociedad democrática», según la pauta democrático-liberal. Aspiración que tras los intentos pausados y consensuales de los Gobiernos de López y Medina entre 1936 y 1945, sufrirá la «aceleración» de 1945-1948 con el trienio de la Junta de Gobierno Cívico-militar, el «retroceso» de 1948-1958, con el paréntesis Militar y la definitiva consolidación del sistema político a partir de 1958 con la «etapa democrática» que a decir de Caballero (1988) constituye «la más larga dominación de la historia venezolana», en tanto que este período resulta el más largo y estable de toda nuestra historia republicana, de 1958 a nuestros días, es decir 37 años hasta ahora (el segundo, cada vez más lejos, esperamos, fue la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez). El carácter descriptivo y somero de la presente enunciación tampoco nos permite referirnos aquí al agotamiento o crisis actual de nuestro sistema sociopolítico, ello tendrá plena incidencia más adelante, pero recomendamos desde ya al respecto, la excelente aproximación de Luis Gómez Calcaño (1995).

c) En lo sociocultural, quizás el propósito más global sea terminar de «occidentalizarnos», sin embargo, sobre las implicaciones de lo cultural volveremos más adelante.

Hacernos, en síntesis, una «sociedad moderna» si con ello podemos resumir el modelo que inspira las múltiples condiciones por las que



hemos estado transitando a lo largo del Siglo XX y sobre todo desde mediados de éste hasta nuestros días.

La necesidad de entrar directamente a la época que nos atañe disculpará la forma demasiado directa con la que nos situaremos históricamente. La Mérida de finales de siglo constituye una realidad social y urbana que, al igual que sus pares en el país, ha sufrido en los últimos 50 años una transformación profunda y radical. De ser una población de escasos 25.064 habitantes en 1950 (Amaya, 1990), en 1990 alcanza los 248.000 habitantes. (OCEI, 1990⁴). De tener dicha población un mayoritario origen rural, campesino, lo cual determina en el sentido antropológico amplio una cultura y por ello una identidad así marcada; viven, en estos años, una severa mutación que los convierte, por lo menos socioespacialmente, en urbana. Cabe aquí preguntarnos si esa transformación se hizo también a nivel de las conciencias y con ellas de las identidades.

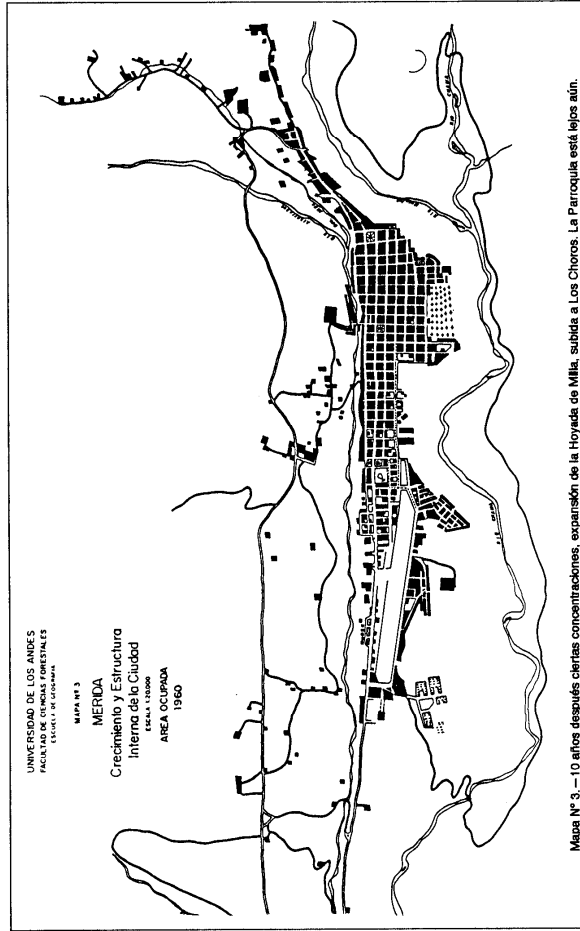
El cambio estimamos, se encuentra actualmente en su fase de consolidación pero por encontramos todavía dentro del mismo la nueva condición resulta aún ambigua, distinta sí, pero profundamente asentada en la anterior, diferente sí, pero sin que la diferencia permita visualizar completamente su antípoda.

¿Cómo definir la condición social de los pobladores de barrios populares de nuestras principales ciudades venezolanas, de Mérida en particular?

Cuando preguntamos por su condición social queremos referirnos a ello en términos socioeconómicos, es decir ¿a cuál clase social pertenecen?; pero también, en términos socioculturales ¿como migrantes campesinos de primera, segunda o tercera generación qué les queda de tales, es decir, de campesinos y qué es propiamente lo nuevo, lo diferente?, pregunta de especialísima pertinencia para una Ciudad como la nuestra, donde la condición rural es aún demasiado reciente. A su vez, ello supone un problema de identidad en gestación que tendrá necesaria consecuencias en el plano sociopolítico, laboral, educativo, etc. Es decir, a nivel de los comportamientos colectivos esperados y sobre todo de los reales.

Partiremos entonces del supuesto de que el impacto de la migración campesina, local regional en su gran mayoría, en la conformación de una «ciudadanía» urbana en la Ciudad de Mérida ha sido tal que para aquellos sectores de relativa reciente llegada, la construcción de su identidad colectiva, completamente adecuada a la realidad espacial, cultural, económica, política (social total como diría Mauss) que vivimos se encuentra en pleno proceso de realización.

⁴ La población de la Ciudad de Mérida reseñada incluye la Zona Metropolitana de la misma, por tanto, suma la que el mismo censo trae separada con Ejido, Tabay, La Joya.

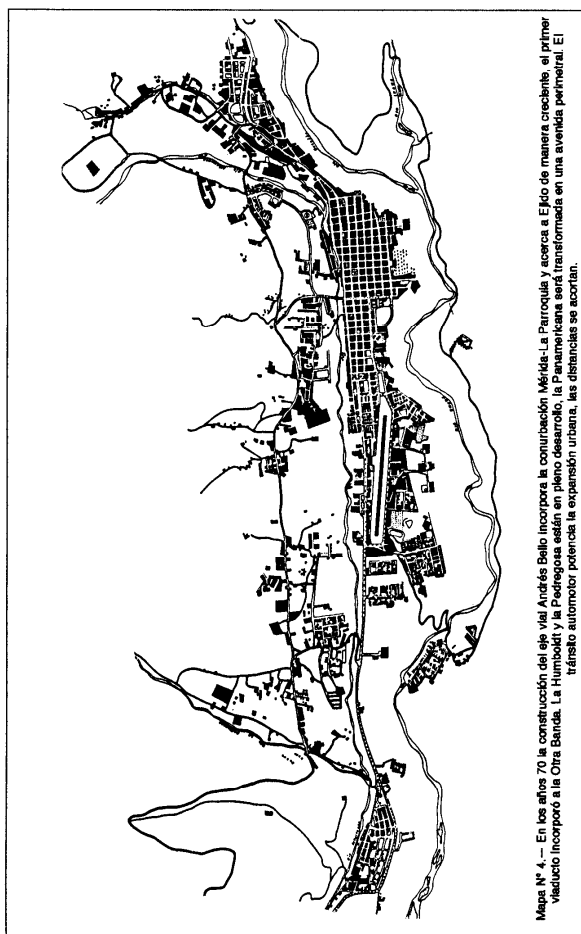


Mapa Nº 3. — 10 años después ciertas concentraciones, expansión de la Hoyada de Mila, subida a Los Choros. La Patroquia está lejos aún.

Esta suerte de gran hilo conductor guiará nuestro análisis, advirtamos de entrada que la comprobación del mismo escapa a los alcances de este trabajo, pues para ello deberán ejecutarse diversas líneas de investigación que pretendemos llevar adelante en nuestro Grupo de Investigación pero, ese es un programa ambicioso para varios años de trabajo, lo que importa es reconocernos en dicha perspectiva, en la que consideramos, como uno de sus factores coadyuvantes, la existencia de Movimientos Sociales en esa dirección, asunto sobre el cual si esperamos dar evidencias con este trabajo.

Es decir, a lo largo del análisis y la descripción que haremos de la conformación de Comités Pro-Viviendas en Mérida a finales de los años ochenta pretendemos rescatar prácticas sociales insertas dentro de un proceso que se inicia con el abandono del lugar de origen de miles de campesinos de la región andina, movidos, estructuralmente, por la crisis de su estilo de vida, mutación propia de una etapa del desarrollo de Venezuela que desaparece aceleradamente, ante nuestros propios ojos. Llegados a la Ciudad y siguiendo la práctica de familiares o antiguos conocidos, estos migrantes procederán a alojarse como mejor puedan, en casa de amigos o familiares, intentando tarde o temprano cierta independencia que sólo conquistarán alquilando o más probablemente invadiendo y autoconstruyendo su propia casa. Las experiencias concretas que logramos recoger copian este esquema con algunas variables y con finales variados pero, nuestras constataciones empíricas nos demuestran que ese ha sido el proceso para la mayoría de los habitantes de nuestros barrios populares, ¿constituye ese proceso un movimiento social? nosotros pretendemos demostrar que si en la medida en que el mismo convierte a estos sectores en hacedores de la Ciudad, de una parte significativa de ella, no solo físico-espacialmente sino, socioeconómicamente y por si fuera poco, política y simbólicamente.

Algunos escollos deberán ser superados en ese camino, el más significativo de ellos puede ser calificado como de método, ¿cómo pasar del análisis de casos que realizaremos a una visión de conjunto de base y proyección histórica? Visto o expresado de otro modo, esto se atiene a la clásica distinción entre lo particular y lo general sobre la cual sólo podemos afirmar nuestra pretensión de basar todo lo que diremos en el principio de totalidad, a partir de él, podremos movernos entre lo particular y lo general con la comodidad epistemológica del que se atiene al principio de que todo cuanto acontece en la realidad social responde al supuesto de su unidad. Los casos, cualesquiera que sean, serán siempre expresión de una totalidad que los amolda y sobredetermina; eso que llamamos las estructuras o el contexto. De ahí que a lo largo de las presentes notas ese será el tránsito permanente, del contexto a los casos y de los casos al contexto. Fernando Calderón (1995) nos amenaza en su último texto con



una antología de estudios de caso sobre movimientos sociales, cuarenta y dos casos, compilada por él y José L. Reyna, la cual se encuentra en prensa, editada por Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de México y que llevará por título «La Irrupción Encubierta». Tomas Villasante, de la Complutense de Madrid, al que tuvimos el gusto de volver a escuchar en Octubre próximo pasado, en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), en Ciudad de México, nos deleitó el año pasado con su notable: «Las Ciudades Hablan, Identidades y Movimientos Sociales en seis metrópolis de Latinoamérica»; obra colectiva basada en estudios de casos, finalmente y no por ser las únicas resulta ya un clásico, el libro de Daniel Camacho (con el cual por cierto, también conversamos en México, recientemente) y Rafael Menjívar, *Los Movimientos Populares en América Latina* (1989), otro estudio de casos; de ellos precisamente intentaremos copiar la posibilidad de analizar casos para proponer tendencias o quizás se trata de lo inverso, es decir, dilucidar tendencias para entender los casos; de cualquier modo los movimientos sociales tal y como conversamos, de manera siempre inconclusa con Oswaldo Jiménez (ahora para siempre inconclusa, amigo) son lo suficientemente plásticos, empecinadamente diversos y escurridisamente complejos como para requerir ésta y N más aproximaciones. He terminado creyendo, finalmente, que tratar de entenderlos es un poco como tratar de entendernos a nosotros mismos, nunca terminamos realmente de hacerlo.

2. El caso de los Comités Pro-Vivienda de Mérida, Venezuela (1985-1995)

2.1- Antecedentes⁵

Entre 1960 y 1980 asistiremos a una dinámica social, política y económica marcada por:

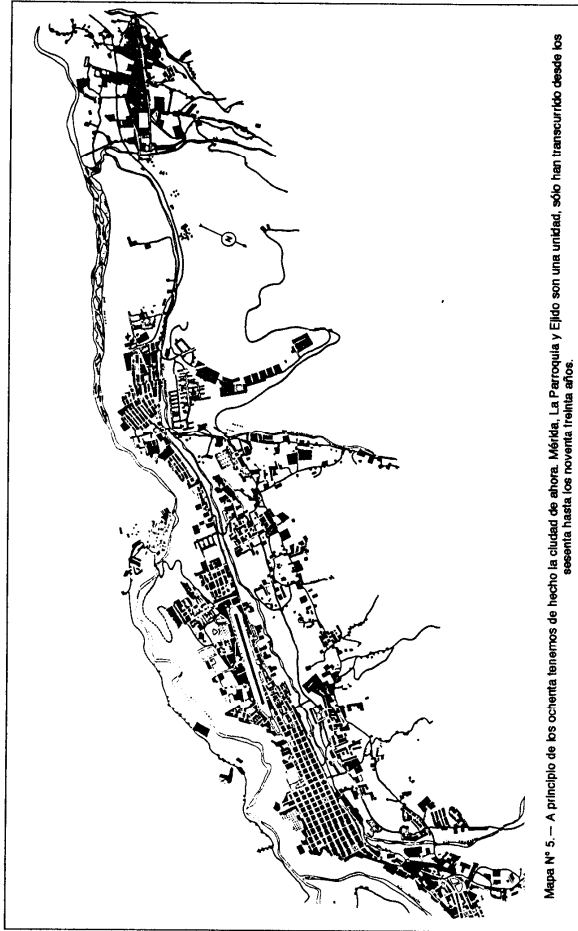
A- La re-instauración, consolidación e inicio de agotamiento del sistema político (la democracia reconquistada en el 58).

B- La profundización del modelo económico de sustitución de importaciones, protección a la industria nacional y desarrollo de un mercado interno, el cual venía siendo desarrollado desde 1945 sin que el paréntesis dictatorial (1948-1958) lo hubiere desviado y finalmente.

C- Una creciente urbanización.

Para explicar la expresión local de ese funcionamiento, suscribimos y recomendamos ampliamente el capítulo VI de la Tesis doctoral de la

⁵ La feliz coincidencia de que mi tutora, la Doctora por el Instituto de Altos Estudios de la América Latina de Paris III, Soc. María Inés Hernández, estuviera trabajando este caso para su tesis doctoral, y yo para mi tesis de Magister nos permitió compartir, con propósitos diferentes, información sobre el mismo, debo reconocer, con gratitud, que la data de los antecedentes es, en buena medida, suya, si bien por supuesto, asumo la plena responsabilidad de esta versión, la cual se combina con informaciones obtenidas de mis trabajos de campo y de mis lecturas.



colega María Inés Hernández (1995) donde se describe y analiza consistentemente, la evolución de las organizaciones de base en los barrios populares de Mérida; de ellos extraemos las siguientes consideraciones que permiten situar, visualizar y concluir los antecedentes que le sirvieron de base al fenómeno de los Comités Pro-Vivienda:

Como señalamos anteriormente, aspiramos movernos entre lo particular y lo general, es decir, entre los casos y sus contextos; o como señala Hernández (1995) citando a Arocena (1995) precisando «las regularidades» macroestructurales, con el cuidado de evitar «euforias localistas utópicas» o «determinismos estructurales excesivos». Ello nos exige identificar entre 1958 y 1985 casos, políticas y procesos de articulación entre lo que hacen los migrantes de reciente localización en la Ciudad, sus luchas y organizaciones; la respuesta del Estado y sus mecanismos de mediación y la evolución posterior de esos procesos. A fin de resumirlo, propondremos el CUADRO Nº 1.

Así se puede observar que durante el período 58-59 la euforia de la libertad, a la caída de la Dictadura de Pérez Jiménez, legítima un proceso de tomas e invasiones, apoyadas por los estudiantes y con líderes que venían de la finalizada clandestinidad (una parte de ellos militantes comunistas o del ala radicalizada de AD) se crean en Mérida los Comités Pro-Defensa a fin de legitimar las mismas, durante ese corto período la Junta de Gobierno implementa el Plan de Emergencia y aquello actúa como acicate de la migración campo ciudad. Apenas toma el poder Rómulo Betancourt, se inicia un proceso de represión por un lado, el ambiente nacional se polarizó, son los años de la insurrección armada de la izquierda y de los golpes militares de derecha y de izquierda; los partidos firmantes del acuerdo de Punto Fijo le dan al gobierno la base de sustentación que le permitirá al Gobierno local reprimir y acabar con los Comités Pro-Defensa; pero, al mismo tiempo se inicia un proceso de mediatización, control y articulación clientelar; sustituyendo los comités Pro-Defensa por las juntas comunales o pro-mejoras, cuya relación clientelar (gobierno-partido de gobierno y comunidades) permitirá sofocar y reconducir la combatividad post 23 de Enero, además de establecer una correa de transmisión y control con las organizaciones de base. Durante esa década se crea Fundacomún y se desarrolla el Programa de Desarrollo de la Comunidad, localmente aparecen las Organizaciones de Desarrollo de la Comunidad (ORDES), controladas por AD y se funda el Instituto de Asistencia Técnica (INCOATE) controlado por COPEI, desde la Asamblea Legislativa; ambas instituciones cumplieron similar rol: apoyo comunal, equipamiento, ayudas, servicios comunales pero, siempre con una estrategia de control clientelar de acuerdo a la vinculación partidista de sus líderes, se trató de una competencia entre AD y COPEI para ver quién controlaba mejor ese frente.

**CUADRO N° 1.
Antecedentes de los Comités Pro-Vivienda**

Época	Tipo de organización	Acciones	Política del Estado	Casos-ejemplos
58-59	Comités pro-defensa	Invasiones	Plan de emergencia	Campo de Oro
50-69	Juntas pro-mejoras o comunales	Arreglos y dotación de servicios	Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, creación de Fundacomún y de ORDES e INCOATE localmente.	Sta. Anita, San José de las Flores y Campo de Oro.
69-73	Se mantienen las anteriores	Ídem y tomas	Promoción Popular. Construcción de urbanizaciones del INAVI	Toma urbanización Carabobo, invasión de Pueblo Nuevo y apartamentos Sta. Mónica.
73-79	Juntas Comunales adscritas a módulos de servicio. Empezan a aparecer Asociaciones de Vecinos.	Arreglos y dotación	Plan de urbanización y equipamiento. Programa para zonas marginales.	Módulos en varios Barrios de la ciudad.
80	En la medida que se resiente el agotamiento se eleva el tono de las luchas y se inicia una nueva etapa la cual conducirá a los casos que nos ocupan.			

Fuente: Elaboración propia.

Tanto AD como partido de Gobierno entre 1959 y 1969 (Betancourt y Leoni) así como COPEI entre 1969 y 1973 (primer Gobierno de Caldera) desarrollan, vencida la subversión, una política social que les permite controlar y mediatizar cualquier descontento y movilización. A pesar de ello, en esos años el crecimiento demográfico y la creciente urbanización, en Mérida la población pasa de 46.339 habitantes en 1961 a 143.805 habitantes en 1981, (Amaya 1990) lejos de quitarle carga a los problemas sociales acumulará progresivamente una tensión que comenzará a hacerse insostenible a mediados de los años ochenta. Antes, la democracia tendrá la más dramática oportunidad perdida de hacer una gestión trascendente a favor de los sectores populares pues entre 1973 y 1983 en los Gobiernos de Pérez (1°) y de Herrera, el Estado venezolano alcanzará su máxima capacidad económica y, al mismo tiempo, paradójicamente, será también el inicio de la debacle por el agotamiento del modelo rentista de desarrollo. Localmente fueron los años del programa de Promoción Popular, durante el período de Caldera y del decreto 332 (Plan de Urbanización y Equipamiento de las Zonas Marginales) durante la «Gran Venezuela» del primer Gobierno de Pérez; una relativa calma y control social caracterizó la etapa pese a que a finales de 1973 se dieron invasiones en el Barrio Pueblo Nuevo y tomas en la Urb. Carabobo (casas de interés social) y en la Urb. Sta. Mónica (apartamentos del INAVI) las cuales terminaron legitimándose gracias, entre otras cosas, al cambio de Gobierno del 1° de Caldera al 1° de Pérez. Durante el período 73-79 la «Gran Venezuela» y la capacidad financiera gracias al primer «boom» petrolero le mantuvo y potenció al Estado su inmensa capacidad mediatizadora y clientelar, de hecho, en términos locales, la expresión popular de las organizaciones de base fueron juntas comunales adscritas a los celebres módulos de servicio, lo cual expresa como señala Hurtado 1991, una articulación de las demandas y de las organizaciones totalmente controladas desde el Estado.

A partir de febrero de 1982 con el celeberrimo «viernes negro» a mediados del Gobierno de Luis Herrera Campins se ubica lo que cierto imaginario popular podría denominar el comienzo del final, o «el fin de la fiesta rentista». En lo que resta de ese período y en particular a lo largo del siguiente Gobierno, el de Jaime Lusinchi (1983-1989), asistiremos en Venezuela al comienzo del drama que hoy vivimos; lo cierto es que a nivel local, la presión del crecimiento urbano y demográfico (la población de la Ciudad de Mérida pasará de 145.801 habitantes en 1981 a 170.902 en 1990, COPEI 1991⁶ y de la acumulación de situaciones de facto, frente a las

⁶ Conviene advertir que esta población solo se refiere a la Ciudad de Mérida, sin incluir la de su Zona Metropolitana, con ella incluida Mérida había tenido en realidad 164.316 hab. en 1981, pasando a 219.708 hab. (estos totales suman lo que el censo de 1990 separa como Mérida, Ejido, Tabay y La Joya). El incremento más explosivo lo tiene Ejido pasando en ese lapso de 20.511 hab. en 1981 a 41.924 hab. en 1990 (un incremento del 1100% en solo 9 años).

que el Estado ve disminuida su capacidad mediatizadora dada su crisis financiera, comenzará a proyectar una nueva situación. La creciente demanda de vivienda por, cada vez, mayores sectores populares generará posibilidades reales de nuevas formas de articulación entre esa demanda popular y la incapacidad de responder como se había hecho siempre; pero, antes de caracterizar de manera directa el nuevo escenario y las nuevas articulaciones, concluyamos los antecedentes mencionado algunos de los casos, sólo a manera de ejemplo, entre los años 79 y 85 que evidenciaron, dada su frecuencia y dado el tipo de desenlace promedio, el desarrollo de una nueva fase:

Loma de los Vientos

Barrio ubicado en la carretera vieja al Chama, durante tres épocas diferentes ha servido de espacio de localización de tres grupos diferentes de familias; en 1979 sucedió la primera invasión espontánea de 70 familias construyendo ranchos bien precarios y conformando un Comité de peticionarios ante el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi). El resultado, aún era posible hacerlo, fue el desalojo y la represión lo cual desfiguró la posibilidad de una solución colectiva, la gente se dispersó. En 1984 ocurre una nueva invasión y construcción de viviendas precarias, resultó un grupo más pequeño (23 familias), intervino la Gobernación y tras las negociaciones del caso fueron reubicados como colectivo en unas barracas en la zona del Chama y con apoyo del Inavi y un programa de autoconstrucción al cual se sumaron damnificados de otros lugares se creó el actual Barrio Justo Briceño, esta experiencia, afirman a manera de queja, vecinos del lugar, estuvo demasiado marcada por la intervención clientelar de militantes adecos y copeyanos que convirtieron el caso de las barracas en tema de la campaña electoral de la época, al final el número total de reubicados en Justo Briceño de procedencia «dudosa» (lease clientelar) alcanzó a más de la mitad de las 54 familias que conformaron finalmente el Barrio. Entre 1987 y 1989 se realiza en Loma de los Vientos una nueva invasión de la cual surgirá un Comité Pro-Vivienda al cual trataremos dentro del análisis de casos que pretendemos de esa experiencia. Las cosas serán, fueron de hecho ahora muy distintas.

Santa Anita

Barrio consolidado anteriormente, ubicado en la parte Norte de la Ciudad, en paralelo a las avenidas Los Proceres y Las Américas; sufrió en su parte aledaña una invasión espontánea entre 1981 y 1982 de 30 familias que autoconstruyeron viviendas más estables.

Los años ochenta en Mérida, Venezuela fue socialmente beligerante, violenta y conflictiva.

Entre otros: enfrentamientos por la defensa de la cuenca del río que sirve de suministro del agua potable (una comunidad semiurbana en el extremo de un movimiento social con importantes apoyos en la ciudad

versus minoritarios sectores económicos fuertemente armados de influencia política, ver García y Jiménez, 1991 y Hernández 1995); protesta estudiantil por el problema del transporte público (Movimiento estudiantil versus Gobierno local y regional); conflicto por la defensa del viejo Mercado Principal, espacio centenario el cual dada la fortaleza moral y activa de sus defensores fue quemado en un incendio «accidental» (movimiento local de apoyo a comunidad afectada versus gobierno local y regional); manifestaciones en solicitud de un poder judicial autónomo y equilibrado (a propósito del juicio al asesino del estudiante, caso que desencadenó el «Marzo merideño», un antecedente directo del Caracazo de 1989 el cual puede ser calificado, desde la lógica de sus actores como la ciudad popular versus el orden establecido); finalmente, entre muchos otros conflictos, se constituye el movimiento «Coordinadora de los Comités Pro-Vivienda y por la vida Simón Bolívar» suerte de organización federativa de los 30 Comités Pro-vivienda que para 1989-1990 fueron convocados por el Gobierno regional recién electo, —en las primeras elecciones locales en las que se eligió de manera directa y nominal, tanto al Gobernador del Estado, como a los miembros del Concejo y Juntas Parroquiales— organizaron una Asociación de Vecinos para negociar con la Gobernación y el INAVI, finalmente fueron desalojados con altos niveles de represión. Los desalojados fueron concentrados junto con las 159 familias de Las Malvinas (otro Barrio desalojado, ver a continuación) en las instalaciones del estadión de beisbol, organizaron un Comité Pro-Vivienda que se considera pionero de los que funcionarían durante esa década y en 1983 luego de movilizaciones y denuncias permanentes, durante más de un año, sobre las condiciones inhumanas que imperaban en él, fueron reubicados en viviendas del Inavi en Los Curos, las cosas parecían que comenzaban a cambiar.

Las Malvinas

Invasión espontánea de 159 familias en 1982, construcción de ranchos precarios, se conforma posteriormente un comité para negociar con la Gobernación y el Inavi, pese a que son desalojados represivamente y alojados por más de un año en el estadión de beisbol de la Ciudad junto a los desalojados de Sta. Anita, consiguen ser reubicadas en 1983 en la Urbanización Los Curos por el Inavi.

Pueblo Nuevo

Constituye uno de los primeros barrios populares de la Ciudad desarrollado entre finales de los años 50 y principios de los 60, se puede considerar un Barrio consolidado, su historia discurre en paralelo al Barrio adjunto llamado Simón Bolívar y del cual está publicada una crónica y descripción exhaustiva (ver Angela Terán 1986). Sin embargo, en 1982 sufrió una invasión de 40 familias las cuales se organizaron en Asociación

de Vecinos y luego de largas gestiones y amenazas de desalojo, ante el Concejo Municipal de la Ciudad y el Inavi lograron, en 1986, un arreglo que les permitió quedarse y consolidar sus viviendas. Estos ejemplos aparentemente «exitosos» de organizaciones de base que conquistan objetivos, sin la mediación clientelar, empezaron a cundir en la ciudad, pero ello nos obliga a concluir aquí los antecedentes y referirnos ahora sí al caso que nos ocupa.

2.2-Los Comites Pro-Vivienda en Mérida entre 1985 y 1995

Como se ha señalado ya y lo afirman estudiosos de la realidad social local (García Carmen, Jiménez Oswaldo, Hernández María Inés, Andrade Raiza, entre otros, ver bibliografía) la segunda mitad de la «década perdida» como llaman a los años ochenta económicamente, para América Latina; resultó, en el caso de la Ciudad de Mérida, Venezuela, especialmente problematizada y manifiestamente conflictiva⁷.

Ello se corresponde evidentemente con la situación del país y del subcontinente; la crisis de la deuda externa, las dificultades financieras y un creciente clima de intranquilidad, incertidumbre e impotencia; marcaron esos años.

Retrospectivamente, puede ahora señalarse, con relativa facilidad, cómo aquellos polvos nos trajeron los actuales lodos pero, pese a que ahora reconocemos que la crisis iniciada el «viernes negro» de febrero de 1982 era apenas el comienzo del manifiesto agotamiento de nuestro modelo rentista de desarrollo; el cual, de manera dramática (por sus implicaciones directas en el imaginario colectivo), hizo trizas en febrero de 1989 con el «Caracazo», gracias a la irresponsable gestión económica del ex-presidente Jaime Lusinchi (1983-1988), el cual agotó in extremis nuestras reservas internacionales a fin de prolongar, con fines electorales, la «ilusión de armonía» y como agravante el inicio de la terapia de «shock» de la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez⁸. Sumemos a la crisis socioeconómica otro febrero «inolvidable» (1992) con el primer intento fallido de golpe, completándose así la segunda fractura, ahora sociopolítica; pues la imagen de aquel tanque que irrumpía contra las puertas de Miraflores no sólo reventó escaleras y puertas, quebró, una vez más en nuestro imaginario colectivo, la discutible pero hasta el momento eficiente legitimidad de nuestro sistema político.

⁷ Fernando Calderón (1985, p.13) afirma en relación a esos años que- «...los ochenta iniciaron la gran mutación sociocultural que viviremos los latinoamericanos por lo menos hasta finales de siglo (se queda corto, creemos)... si en el plano económico fueron la década perdida... en lo social, (son) los de la diferenciación y la explosión de múltiples comportamientos colectivos».

⁸ Algo similar ocurrió en México el año pasado en el tránsito entre Salinas y Zedillo, «correr la arruga» o «después de mí el diluvio» parecen comportamientos demasiado frecuentes de nuestras desprestigiadas élites políticas.

Pese a esa doble ruptura en el ánimo colectivo concretadas más bien en los años más recientes, primera mitad de los noventa, entre 1985 y 1990 sostenemos que Mérida a manera de experimento premonitorio concentró suficiente conflictividad como para no sólo adelantar su propio «Caracazo», guardando las distancias, sino en particular concordancia con la situación que analizaremos, desarrollar una nueva y singular articulación de las demandas de organizaciones de base con un estado nacional en crisis y un estado local de nuevo cuño, dadas las reformas políticas que pretendían oxigenar los gobiernos locales; todo esto va a generar, a nuestro juicio, una mutación cualitativa de los terminos de la relación histórica que hemos apreciado en los últimos 40 años, entre los nuevos habitantes de la Ciudad, migrantes de primera generación, el Estado en su triple ámbito nacional, regional y local y la producción y/o reproducción societal de esos años. Pero, para no adelantar conclusiones sin haber descrito los detalles de lo ocurrido, pasemos a los mismos.

Nos encontraremos así en presencia de dos actores, 1- Los Comités Pro-Vivienda, herederos de una cierta tradición de lucha que ellos superarán en términos cuantitativos pero sobre todo cualitativos y 2- Un Estado, a nivel local, mutado por las reformas políticas que permitieron la elección directa de los representantes ante los poderes públicos, ensayando nuevas modalidades de resolución de las demandas locales.

Todo ello generará procesos diferenciados que conducirán a nuevas formas de relación entre demandantes y Estado. Del mismo modo, a una nueva etapa del proceso de reproducción social.

2.3- Los Comités Pro-Vivienda por dentro

En 1990 a propósito de los acuerdos entre la Coordinadora de los Comités Pro-Vivienda y el Gobierno regional del Estado Mérida en Venezuela, los cuales conducirán a la creación del Instituto Regional de la Vivienda (Inrevi) y a la resolución aparente de la demanda central del movimiento (las viviendas), en primera instancia, con la construcción de dos urbanizaciones populares. Existían en Mérida 30 Comités organizados. Tuvimos, frente a esa multiplicidad de expresiones, contacto prolongado y cercano con los Comités de los Barrios Vega de Andrés Bello, con el del Barrio Loma de los Vientos y con el del Barrio denominado Ciudad Pérdida. De ellos, de su composición social (CUADRO N° 4) y de sus características espaciales (CUADROS N° 2 Y 3) extraeremos los siguientes datos (aparecen datos del Barrio El Entable pero esa comunidad tuvo un desarrollo diferente)⁹.

⁹ Tomados las mayorías de ellos del acopio empírico de otra investigación en la que participamos igualmente «Estudio cualitativo de la Pobreza en Mérida» Proyecto H-191, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (CDCHT-ULA). La data básica es la misma si bien los diversos propósitos de los dos proyectos nos permitieron extraer informaciones valiosas tanto para la pobreza de los involucrados como para su condición de participantes en el mencionado Movimiento Social de los Comités Pro-Vivienda.

Los datos aportados de carácter socioeconómico y espacial sólo quieren denotar el carácter de extrema indigencia y sentido transitorio que tenía el hábitat de los mencionados, en este sentido su condición no difiere de la que históricamente habían tenido sus pares en los últimos cincuenta años; la diferencia radica ahora en el sentido de su solicitud, en la extensión y beligerancia de sus demandas, en la organización territorial y vertical de los comités y de la coordinadora y en la diferencia de su opositor, un estado a nivel regional «bañado» de mayor representatividad y legitimidad y además de eso, con una estrategia diferente.

Pero no fue en realidad solamente el Estado quien mostró diferentes maneras de comportarse, en una medida importante el Gobernador local lo que hizo fue amoldar sus respuestas a una solicitud que por su magnitud, por su combatividad y por su grado de integración y organización territorial no permitiría ser tratado en términos tradicionales.

Eliminada o disminuida la mediación clientelar tradicional dada la crisis de legitimidad de los partidos políticos y la nueva situación local y nacional. Los solicitantes no estaban sólo, hasta 30 Comités en toda la Ciudad y en su zona metropolitana, cada uno con documento de constitución notariado y asesorados jurídicamente, integrados en la Coordinadora Simón Bolívar, apoyados públicamente por organizaciones sindicales como CUTEM, vecinales como FECARVEM y CESAP y universitarias como la Dirección de Extensión de la ULA y el PEADS de la Facultad de Derecho, además del asesoramiento y la solidaridad de individualidades diversas, profesionales, profesores universitarios, el Obispo Monseñor Salas, entre otros; había detrás de ellos una muestra significativa de la sociedad civil local. El Gobernador lo sabía de ahí que no se trataba de un hecho aislado, ahora estábamos en presencia de un Movimiento Social que pese a sus limitaciones y contradicciones indicaba un nivel cualitativamente distinto del desarrollo popular de nuestra Ciudad.

El otro aspecto que queremos resaltar con énfasis y que nos llamó especialmente la atención, resultó ser la fundamentación digamos ideológica, simbólica y/o sociocultural de la lucha de estos Comités. Hernández (1995) se ocupa de ello refiriéndose a la lucha por el derecho a la vivienda como, recordando a Lefebvre (1968), la lucha por «el derecho a la ciudad». Jiménez y García (1991) lo habían referido tangencialmente en su artículo. Pues bien, esto que resulta un tanto abstracto y difícil de medir, estuvo presente de manera consistente y manifiesta en la lucha de estos Comités en la práctica, constituía una suerte de declaración de principios, en las que se proclamaban una creencia imprecisa en los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, especialmente los referidos a familia, vivienda, trabajo, salud y educación y la necesidad de organizarse para reclamarlos y hacerlos realidad. Con toda intención, hemos reproducido en los anexos de este trabajo —como muestra de lo que queremos

afirmar— uno de los documentos constitutivos de los mencionados Comités, se trata de un acta notariada en la que se describe quiénes, cuándo y para qué se constituyen en la Junta Vecinal y Comité Pro-Vivienda Andrés Bello, este documento evidencia una difusa conciencia ciudadana de diferente calibre a la que tuvimos posibilidad directa o documental de apreciar en las luchas anteriores. No se trata ni de exagerar ni de dramatizar este rasgo, pero de algún modo creemos apreciar en él una actitud mucho más identificada con lo que en otro contexto un jurista calificaría de conciencia del estado social de derecho.

Cuando se quiere integrar al análisis una dimensión más socioantropológica del significado de estas reivindicaciones algunos especialistas advierten la existencia de la variable identitaria o la posibilidad como afirma Hurtado (1993) del etno-socio-análisis que nos permita advertir las motivaciones socioculturales de la acción. Los asuntos señalados —creemos— representan atisbos de una «cultura cívica» (Krischke, 1993) de diferente sentido, más acorde con los tiempos que vivimos, ¿más moderna y urbana? Quizas, de cualquier modo, ello representa la conformación de una identidad que refleja las nuevas articulaciones entre la lógica de la necesidad, compartida por igual con todos los migrantes de los últimos cuarenta años, las experiencias acumuladas durante ese tiempo, el agotamiento del sistema sociopolítico nacional y la potencial diferencia con la expresión local y regional del mismo, revestida de nueva legitimidad y de mayor representatividad.

Una síntesis apretada de lo que destacamos en este aparte (los Comités Pro-Vivienda por dentro) es que, perteneciendo preponderantemente, en origen y en condiciones socioeconómicas, a los mismos sectores que conformaron la corriente migratoria rural regional que desde los años cuarenta y cincuenta han fluido y conformado la población de los barrios de la Ciudad; ahora poseen una capacidad de relación entre sí y una disposición a la integración mucho mayor, del mismo modo, ahora luchan y justifican la lucha con un discurso y a partir de unos valores que expresan mayor identificación cívica, en el sentido doble del término, como nuevos ciudadanos (el derecho a la Ciudad) y como nuevos ciudadanos (una cultura de participación y de exigencia sobre sus derechos sociales).

3- Reformas del Sistema Político Venezolano que afectaron las relaciones entre los actores sociales y políticos de Mérida, Venezuela, en los años ochenta

En los acontecimientos que hemos estado describiendo tiene indudable pertinencia señalar los efectos de dos transformaciones jurídicas que han producido consecuencias de fondo sobre el sistema de relaciones sociopolíticas local y nacional. La primera es la promulgación a principios de

los años ochenta de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual reconocía y consagraba la participación ciudadana desde la perspectiva de las Asociaciones de Vecinos. Que si bien, algunos autores consideran este asunto como un mecanismo de control y mediatización de las luchas urbanas («la participación permitida» indican García y Jiménez, 1991, por ejemplo, o «una nueva racionalidad política para reforzar el Estado» señala Nelson Prato, 1986) lo cierto es que promovió una institucionalización de las organizaciones populares que en el caso de Mérida, fortaleció las luchas populares y permitió crear una posibilidad de conexión territorial e identitaria que está en la base misma de todos los acontecimientos ocurridos en los años ochenta y en los evidentes saltos cualitativos de las mismas¹⁰.

La otra reforma influyente se refiere al conjunto de leyes que se aprobaron entre 1988 y 1989, la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, la Ley sobre el Periodo de los Poderes Públicos de los Estados, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y una nueva Ley de Régimen Municipal; resultado de las propuestas de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, creada en el período de Jaime Lusinchi y mantenida en los subsiguientes, hasta nuestros días) y obtenidas bajo la presión de la etapa pre-electoral de 1988 pero sobre todo, frescas todavía las cenizas y los escombros del Caracazo de febrero de 1989 (solo así nuestra élite política estuvo dispuesta a hacer algunas concesiones o más exacto sea decir, le son arrancadas algunas concesiones).

Avalado por las nuevas posibilidades institucionales, de la cual él mismo era resultado, el Gobernador del Estado, electo en diciembre de 1989, desde la misma campaña electoral comenzó a establecer relaciones con la «Coordinadora de los Comités Pro-Vivienda y por la Vida Simón Bolívar» y a elaborar una propuesta de nuevo tipo, como promesa de la campaña el candidato afirma resolverá el problema de la vivienda popular. Una vez en ejercicio del Gobierno del Estado Mérida, se sigue contactando a la Coordinadora la cual contaba con el apoyo institucional de la Federación de Vecinos del Estado Mérida (Fecavem), de la Cutem, Central de Trabajadores del Estado Mérida y profesionales universitarios y algunas instancias de la Universidad, como la Dirección de Cultura y Extensión, entre otras (apoyos de profesionales identificados con sus luchas).

En octubre de 1990 se crea el Instituto Regional de la Vivienda¹¹ (Inrevi) y son convocados a una asamblea amplia los involucrados en la problemática de la vivienda, especialmente a la Coordinadora y a los

¹⁰ Como evidencia de lo dicho, el Alcalde de la Ciudad de Mérida para la época (1991) señala, en una ponencia presentada ante la AVECI, que en Mérida, para ese año, habían 190 Asociaciones de Vecinos de las cuales 150 cumplían con los requisitos exigidos por la Ley, divididas en dos federaciones.

¹¹ Al respecto recomendamos el trabajo de grado de la politóloga Yohama Millán 1992, del cual fui su tutor, se trata ahí la creación del INREVI.

Comités Pro-Vivienda. Se incorpora un representante de la Coordinadora en el Directorio del Inrevi, se decide acometer la construcción de dos urbanizaciones populares. Una situada en el sector de El Arenal, entre las poblaciones de Mérida y Tabay, Zona Metropolitana de Mérida, en terrenos ubicados y obtenidos por los mismos solicitantes, la misma terminará llamándose «Carlos Gainza». La otra urbanización será la «Carlos Sánchez» ubicada entre Ejido y el sector de Aguas Calientes también Zona Metropolitana de Mérida.

El Inrevi nace como expresión de la crisis del problema habitacional que obliga al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la República a desarrollar algunos mecanismos y propuestas que intentarán, sin éxito posible, enfrentar el déficit de viviendas, el cual según estadísticas oficiales (OCEI, 1990) ya estaba para esa época en 880.000 viviendas¹²; en ese contexto se promulga la Ley de Política Habitacional (septiembre de 1989) y se crea el Consejo Nacional de la Vivienda, la propuesta de creación del Inrevi se da dentro de las previsiones de la mencionada ley.

Lo cierto es que el Estado en su dimensión regional asume la competencia y con apoyo financiero nacional de Fondur y la participación de empresas privadas locales el Gobernador desarrolla una nueva manera de enfrentar un viejo asunto ¿Qué hacer con la gente que no tiene casa y que en un preponderante 87%¹³ tiene origen rural reciente (primera o segunda generación de migrantes rurales de la zona)

4- La concertación entre la Coordinadora de los Comités Pro-Vivienda y el Gobierno Regional. Desenlace y balance.

Perspectivas de un Movimiento Social reivindicativamente exitoso pero incapaz de reconocerse aún como sujeto social

Convocados a la Asamblea en octubre de 1989 la coordinadora acepta un plan de construcción de dos urbanizaciones que tiene la particularidad que incorpora y asocia a los comités transformando el enfrentamiento en abierta colaboración pero, no en los términos clientelares tradicionales en los que la mediación del partido resultaba esencial, sino en una especie de trato directo con las organizaciones reivindicativistas incorporándolas no solo a la distribución de las viviendas sino a la obtención del terreno (así fue en El Arenal con la Carlos Gainza), administración de las asignaciones, promesa de no permitir más invasiones ni más viviendas en el área que ocupaban en ese momento, en cierta medida, a

¹² Ver Lovera (1988), Raiza Andrade 1988 y Hernandez María Inés 1995.

¹³ Cálculo exacto del Censo realizado al total de la población de las urbanizaciones Carlos Sánchez y Carlos Gainza realizado entre Agosto y Septiembre de 1993 por parte de la investigación sobre la pobreza en Mérida, proyecto de nuestro Grupo en el que también participamos.

Cuadro Nº 2. Datos Físicos

Nombre del barrio	Fecha de Fundación	Extensión del terreno	Propiedad	Topografía	Ubicación
(1) Vega Andrés Bello	1967	2 Has.	Inparques	Pendiente de 35º	Entre Parque Andrés Bello y Río Albarregas
(2) El Entable	1990	0,5 Has.	INAVI	Plano	Parte Sur Urb. Los Curos, al lado de la Urb. del mismo nombre.
(3) Ciudad Perdida	1968	2 Km lineales (a lo largo de al Urb.)	Pendiente INAVI (Ranchos dispersos)	Moderada flanco izquierdo.	Parte media y Norte de Los Curos
(4) Loma de Los Vientos	1967	1 Ha	INAVI	Pendiente 30º	Carretera vieja de Sta. Juana-Urb. Carabobo

Fuente: Equipo Sociocentrológico de la Ciudad y la Región. ULA Mérida. 1992.

cogestionar el proceso de construcción, distribución y mediación entre los miembros de los Comités y la Institución estatal local.

Así el Gobierno regional se anotó un éxito al lograr desmontar una suerte de bomba social que la situación precedente había potenciado en extremo; incorporó, reconociéndolas, a las organizaciones particulares y a su ente federativo, la Coordinadora. Tras la búsqueda exhaustiva, en el caso de estas dos urbanizaciones y de los 17 Comités que fueron reubicados, de cualquier manejo clientelar, debemos reconocer que ninguna asignación se hizo a las espaldas ni de la Coordinadora ni de ningún Comité en particular. Lo nuevo del asunto es que se trató con vecinos, es decir ciudadanos y no con militantes o simpatizantes. De hecho y como prueba que refuerza lo señalado, durante la entrega de las casas en la urbanización Carlos Gainza en el sector El Arenal, cuando se estaban asignando las mismas se aparecieron 15 familias que no estaban en las listas concertadas, aquello produjo conmoción pues a pesar de que sí eran gente necesitada su vinculación era clientelar, se trataba de gente humilde y con necesidad real de vivienda pero vinculada al partido de Gobierno del Gobernador. Los Comités presentes no permitieron que se les otorgara casa a los que no habían participado de la lucha y del acuerdo. Finalmente, se aceptó que en un terreno contiguo, el Inrevi otorgara materiales de construcción y en un programa de autoconstrucción los mismos solicitantes hicieran sus propias viviendas.

Cuadro N° 3. Servicios

Barrio de Andrés Bello	Vega de Andrés Bello	El Entable	Ciudad Perdida	Loma de los Vientos
Agua				
<i>Fuente</i>	toma ilegal	quebrada	rio	tanquilla INOS
<i>Calidad</i>	la del acueducto	mala	mala	la del acueducto
Electricidad	CADELA legal	toma ilegal	toma ilegal	toma ilegal
Aseo Urbano	quemadero	bote	quema	quema
Domiciliario	bote al rio	a la quebrada	y bote al rio	y bote al rio
Eliminación de aguas negras	circulación superficial	vertederos a la quebrada	vertederos al rio	circulación superficial

Fuente: Equipo Socioantropológico de la Ciudad y la Región. ULA Mérida. 1992.

Cuadro N° 4. Datos demográficos

Barrios de Andrés Bello	Vega	El Entable	Ciudad Perdida	Loma de los Vientos
Número de familias	52	9	18	21
Población	278	33	209	115
Población Adulta	120	16	110	63
Población Infantil	150	17	99	52

Fuente: Equipo Socioantropológico de la Ciudad y la Región. ULA Mérida. 1992.

Según nuestro propio Censo realizado entre abril y septiembre de 1993 el Movimiento de los Comités Pro-Vivienda entre finales de los años ochenta y principios de los noventa había logrado la posibilidad de que 352 familias como primer contingente se mudaran para las dos urbanizaciones ya referidas, distribuidas así: 273 familias en la Urb. Carlos Sánchez y en la Carlos Gainza se encuentran 79 familias, total 1.890 personas.

Al llegar a su nuevo hábitat hubo una segregación por origen, las personas fueron ubicadas en correspondencia a los Comités a los que pertenecían, así, nuestra muestra, los de Andrés Bello, Loma de Los Vientos y Ciudad Pérdida casualmente en ese orden, tomaron los primeros las casas de la calle 1, 3 y 4 respectivamente en el caso de la Carlos Sánchez en la vía entre Ejido y Aguas Calientes; la distribución en la Carlos Gainza no obedeció a tal consideración.

La organización vertical y cohesionada de los Comités originales dio pie a una nueva situación después de mudarse a los lugares señalados, podríamos decir que una vez obtenida la reivindicación tal hecho produjo un reflujo de la organicidad pues en el caso específico de la Urbanización Carlos Sánchez casi un año después al elejirse la Asociación de Vecinos

la mayor parte de los líderes de los antiguos comités no fueron electos para ningún cargo de la Junta, en realidad en esa urbanización se generó una suerte de segregación entre los habitantes que venían de barrios consolidados y los originarios de áreas de alto riesgo, casas de desecho y condiciones socioeconómicas más precarias. Las diferencias, desde el punto de vista cultural, entre los primeros y los últimos salieron a relucir en perjuicio de los más pobres. Pese a lo interesante del punto este constituye otro asunto, del cual hemos emprendido un análisis aparte acerca de cómo evoluciona una organización reivindicativista cuando sus fines se ven realizados. Esta gente logró lo que quería, pero ese resultado los puso al final de un proceso y, simultáneamente, al comienzo de otro. Cosa similar diremos del tipo de vivienda construida y de las características socioambientales de las urbanizaciones construidas por el Inrevi¹⁴, las cuales siempre fueron precarias pero que en construcciones posteriores, como las de las Urbanizaciones Los Caracoles y Don Perucho¹⁵ se han roto récords de improvisación, mala calidad de los materiales, incumplimiento de las normas, reducción del tamaño de la casa y pare Ud. de contar.

El balance es reconocimiento y transformación, los miembros de los Comités avanzaron muchísimo si los comparamos con los migrantes de los últimos cuarenta años, pero una vez que resuelven el hábitat su status se nivela con los que ya viven en la Ciudad y entran en desventaja con los que tienen más experiencia, un camino de estar siempre empezando; sin embargo nunca serán los mismos, cambiaron, desarrollaron una nueva identidad. El problema es que no lo saben.

Bibliografía

- AGUILERA D, O V (1991) Movimientos Sociales y especificidad latinoamericana. Ponencia presentada ante el XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). La Habana, Cuba.
- (1993) Aproximación a la Sociohistoria reciente de Mérida, Venezuela, 1993. Ponencia presentada ante el XIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Caracas.
- (1995) ¿Existen nuevos liderazgos en la Sociedad Civil? Ponencia presentada en el Seminario Nacional organizado por el CEPESAL de la UCV en Mérida en Mayo de 1995, se encuentra en prensa la publicación de la misma en el Nº 12 de la Revista Venezolana de Ciencias Políticas, del CEPESAL, ULA.

¹⁴ Al respecto, además de nuestra investigación sobre la pobreza, conocemos de un estudio médico sanitario sobre condiciones de estas viviendas cuya conclusión más significativa es que la salud de los habitantes de estas comunidades no ha mejorado después del cambio, han variado los tipos de enfermedad pero no la condición cultural que las promueve.

¹⁵ Tenemos adecuada documentación empírica sobre el caso de la Urbanización Don Perucho, en buena medida obtenida por la Arquitecta Leyda Rondón de Carnevali, alumna de nuestro Seminario Comunidad y Desarrollo Urbano del Postgrado de Desarrollo Urbano Local. Sobre Los Caracoles información hemerográfica en la prensa local. A partir de estos dos casos que no trataremos en este trabajo, pareciera ser que el INREVI ha involucionado en los últimos dos de constructor de viviendas populares a constructor de engendros populares.

- CALDERÓN F. (1995) Movimientos Sociales y Política. La década de los ochenta en América Latina, Siglo XXI y UNAM, México.
- CAMACHO D. (1994) Pobreza, Movimientos Sociales y Derechos Humanos en América Central: conferencia dictada en el IV Congreso Venezolano de Sociología, Maracay, Venezuela, Octubre de 1994. Notas sin publicar de la misma.
- (1995) La Nueva Movilización Social. Notas a su ponencia al XX Congreso.
- GARCÍA GUADILLA M P (1993) Crisis, actores sociales y geografía urbana: segregación y castas socioecológicas, en Ferrer/Guillén Población y dinámica espacial urbano-rural. Instituto de Geografía, ULA, Mérida, Venezuela.
- (1994) Configuración espacial y movimientos ciudadanos: Caracas en cuatro tiempos. En las Ciudades Hablan de Villasante Tomas (Coordinador) Editorial Nueva Sociedad. Caracas.
- GARCÍA C T y JIMÉNEZ O. (1991) Mérida: Tres Años (1986-1988) de Conflictividad Social, en FERMENTUM, Nº 1, Mérida, Venezuela.
- GOHN M G M (1991a) Movimentos Sociais e luta pela moradia. Edicoes Loyola. Sao Paulo.
- (1991b) Movimientos Populares no Brasil, 1970-1990. Universidade Estadual de Campinas, Brasil; ponencia presentada ante el XVIII Congreso de ALAS, La Habana.
- GÓMEZCALCAÑO L. (1995) Crisis de Legitimidad e Inestabilidad Política en Venezuela en Rev. Ven. de Ecn. y Cs. Sociales; Nº 2/3, IIES-FACES-UCV, Caracas 1995.
- HERNÁNDEZ de P M I. (1995) Acciones Colectivas y Luchas Urbanas en la Ciudad de Mérida, Venezuela Tesis Doctoral, versión preliminar, en borrador.
- LANDER E. (1995) Movimientos Sociales Urbanos, Sociedad Civil y Nuevas Formas de Ciudadanía en Rev. Ven. de Eco. y Cs. Sociales, Nº 2/3, IIES-FACES-UCV, Caracas.
- MATO D. (1994) Teoría y Política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y Europa. UNESCO, Nueva Sociedad, Caracas.
- PAKULSKI J. (1993) Mass Social Movements and Social Class en International Sociology of the International Sociological Association (ISA), Volumen 8, Nº 2, Junio 1993.
- SALAMANCA L. (1990) La Agenda Conceptual de los Movimientos Sociales en POLITEIA, Nº 14, Instituto de Estudios Políticos UCV, 1990, 107-146.
- TOURAINÉ A. (1992) Beyond Social Movements? Theory, Culture and Society. USA Nº9.
- VILLASANTE T. (1992) Autocrítica y Propuesta desde los Movimientos Sociales para la construcción de las subjetividades populares. Universidad Complutense de Madrid. Notas a su Ponencia al XVIII Congreso de ALAS, La Habana.
- (1994) Las Ciudades Hablan. Identidades y Movimientos Sociales en seis metrópolis de Latino América. Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
- (1995) Las Democracias participativas y sus métodos instituyentes. Notas de su Ponencia al XX Congreso de ALAS, Ciudad de México, Octubre de 1995.
- ZEMELMAN H y VALENCIA G (1990) Los Sujetos Sociales, una propuesta de análisis en ACTA Sociológica, Volumen III, Nº 2, Mayo-Agosto de 1990, UNAM, México.